



Un reformismo ambicioso, radical y atropellado modificará las bases del sistema político. Entraremos a una suerte de tiranía de la mayoría.



**LUIS CARLOS
UGALDE**

luiscarlosugalde@integralia.com.mx

República distorsionada

Salvo que ocurra algo inesperado, el Tribunal Electoral validará hoy que Morena y sus aliados tengan 364 diputados, equivalentes al 73% de la Cámara, eso es, 19 puntos por encima de su votación en las urnas.

Durante septiembre viviremos el proceso más ambicioso, radical y atropellado de reformismo constitucional que modificará las bases del sistema político mexicano. En el papel primero y luego en la realidad ingresaremos –gradualmente– a una nueva dimensión de régimen político.

Un sistema mayoritario sin lugar para el disenso, sin restricciones para el ejercicio del poder. Uno donde manda la mayoría por encima de las leyes y de los derechos de las minorías. Un sistema más centralizado, menos federalista. Una suerte de tiranía de la mayoría. El cambio será gradual pero el destino será el mismo.

López Obrador cuestionó las reformas estructurales del llamado Pacto por

México, ocurridas en 2013 y 2014, porque según él implicaron “la compra de opositores” y el control de la política por parte de “la mafia del poder”.

Esas reformas fueron aprobadas según los requisitos contables de más del 66% de los legisladores con base en una alianza –antinatural según AMLO– entre PAN, PRI y PRD, con la suma de votos del Partido Verde.

Hoy López Obrador llevará a cabo un “reseteo” del sistema político con apenas 54% del voto popular. La envergadura de los cambios requiere un mayor consenso social, no solo aquel que emerge del 54% de los votos. Si López Obrador fuera oposición, acusaría a las autoridades electorales de legitimar un fraude a la Constitución y a Morena de unirse con su enemigo verde para perpetuarse en el poder.

Claramente la de 2024 fue una elección a favor de la continuidad. Por supuesto que López Obrador es el Presidente más popular de la historia moder-

na de México. Asimismo, las encuestas reflejan poco conocimiento de las reformas del llamado Plan C y quienes expresan una postura lo hacen mayormente a favor de la reforma judicial y de la desaparición de los órganos autónomos.

Pero el 66% de la legitimidad legislativa que pide la Constitución para ser enmendada no existe. El 54% de los votos de la coalición oficialista se convierten en 73% de la Cámara de Diputados por tácticas de ingeniería electoral que, si bien están dentro de los márgenes de la ley, violan el fin de la Constitución que es contar con una República representativa (art. 40) y que las reformas constitucionales emerjan de un proceso incluyente de negociación (límite de 300 legisladores establecido en el artículo 54).

Si López Obrador cuestionó el reformismo del Pacto por México porque le faltaba “pueblo”, el mismo argumento aplica a las reformas del Plan C: les falta



pueblo. Pueden tener los números, pero no el consenso social. Los votantes que se expresaron a favor de la continuidad el 2 de junio sumaron 54% de los votos legislativos y lo hicieron –mayormente– por el efecto de los programas sociales y de la narrativa incluyente y moralista de López Obrador, no por el contenido del Plan C.

López Obrador quiere forzar la maquinaria legislativa para coronarse en la Plaza de la Constitución el 16 de septiembre. Quiere que estas reformas sean aprobadas en modo *fast track* para que nadie les cambie una coma y llevarse los aplausos. Prefiere su gloria personal a dar tiempo para que haya una deliberación incluyente que permita mayor consenso.

Cuando la embriaguez haya pasado y veamos en perspectiva lo ocurrido en 2024, muchos cuestionarán la legitimidad de esta avalancha legislativa, igual que hizo López Obrador con el Pacto por México. Y entonces las reformas ocurridas serán puestas en tela de juicio, salvo que la reforma judicial realmente purifique la impartición de justicia.

Frente a los verdaderos problemas del país –la inseguridad, el crimen organizado, el bajo crecimiento económico, la falta de recursos fiscales para expandir los programas sociales y los riesgos de perder la oportunidad histórica de la relocalización–, estamos atrapados en la agenda personal de López Obrador.